

AMNISTÍA INTERNACIONAL - DECLARACIÓN PÚBLICA

14 de marzo de 2022 EUR 46/5345/2022

FEDERACIÓN RUSA: PONER FIN A LA CENSURA DE LAS VOCES CONTRA LA GUERRA

Amnistía Internacional condena enérgicamente los cada vez más intensos ataques contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes perpetrados por las autoridades rusas desde el principio de la invasión rusa de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. La organización insta a las autoridades rusas a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la propia Constitución rusa y, en consecuencia, respetar, proteger y realizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, lo que implica, entre otras cosas, permitir la celebración sin obstáculos de protestas pacíficas contra la guerra, liberar a todos los manifestantes pacíficos recluidos y retirar los cargos en su contra, levantar todas las restricciones impuestas a los medios de comunicación independientes y derogar o reformar todas las leyes que restringen en exceso y de manera arbitraria, los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Asimismo, la organización insta a la comunidad internacional a apoyar y solidarizarse con los activistas de la sociedad civil, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas rusos, que corren especial peligro por expresar su oposición a la invasión rusa de Ucrania.

NUEVAS LEYES AHONDAN EN LA RESTRICCIÓN INDEBIDA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN PACÍFICA

El 4 de marzo, en cuestión de un día, ambas cámaras del Parlamento ruso aprobaron apresuradamente nuevas leyes — que el presidente Putin firmó— por las que se reformaba el Código Penal y el Código de Delitos Administrativos, limitando gravemente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Estas iniciativas legislativas se introdujeron a toda prisa en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, que tendrá amplias y catastróficas consecuencias para los derechos humanos en Rusia, más allá del conflicto armado.

En virtud de las mencionadas iniciativas, se añadió al Código Penal el artículo 207.3, que amplía el alcance de las leyes rusas ya existentes sobre “noticias falsas” y establece duras sanciones por la “difusión pública de información falsa a sabiendas sobre el empleo de las fuerzas armadas rusas para proteger los intereses de la Federación Rusa y su ciudadanía, y defender la paz y la seguridad internacionales”. Dichas sanciones incluyen cuantiosas multas que van desde 700.000 hasta cinco millones de rublos (de 5.220 a 37.283 dólares estadounidenses) y penas de prisión de entre tres y 15 años, si la difusión de esa información ha tenido “consecuencias graves”

En la ley en cuestión no se define, de forma alguna, qué constituye “información falsa a sabiendas”, ni se establece ningún criterio para su evaluación. Sin embargo, la autoridad rusa reguladora de los medios de comunicación y la información (Roskomnadzor) ha emitido una declaración por la que todos los medios de comunicación quedan obligados a utilizar sólo la información recibida de fuentes oficiales. Se entiende, por tanto, que se considera “falsa” cualquier información publicada que no proceda de fuentes oficiales o contradiga la información distribuida por las autoridades rusas. En concreto, la información oficial sobre la intervención militar rusa en Ucrania está plagada de mensajes y afirmaciones falsos y deliberadamente engañosos, por lo que, en la práctica, se ha criminalizado todo aquello que desmienta dicha información y facilite un análisis independiente de la situación.

Asimismo, la ley añade al Código Penal el artículo 280.3, según el cual incurren en responsabilidad penal las “acciones públicas que tengan por objeto desacreditar el empleo de las fuerzas armadas rusas”. Tampoco, en esta ocasión, se explica el significado de “desacreditar”, y la imprecisa redacción del artículo se presta a la apertura de procesos judiciales por motivos políticos. Además, se prohíben expresamente los “llamamientos públicos a oponerse al empleo de las fuerzas armadas de la Federación Rusa”, con lo que quedan criminalizadas, aún más, las protestas contra la guerra y otras

iniciativas por el fin del conflicto armado, y sofocados, en consecuencia, los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Este delito puede suponer el procesamiento penal de una persona, si ha sido ya hallada culpable del delito administrativo equivalente (artículo 20.3.3 del Código de Delitos Administrativos) en un periodo inferior a un año. En ese caso, la persona puede ser multada con cuantías que van desde 100.000 hasta un millón de rublos (de 746 a 7.457 dólares estadounidenses) o condenada a periodos de entre tres y cinco años de prisión, o a otros castigos, incluidos el de trabajos forzados. Si, por el contrario, la persona es procesada en virtud del código administrativo, puede enfrentarse a multas de entre 30.000 y un millón de rublos (de 224 a 7.457 dólares), según se trate de un particular, un funcionario público o una entidad jurídica.

Además de haber tipificado como delitos administrativos las acciones públicas “que tengan por objeto desacreditar el empleo de las fuerzas armadas” y los “llamamientos públicos a oponerse al empleo de las fuerzas armadas”, la nueva ley establece sanciones más duras si éstos van acompañados de “llamamientos a celebrar actos públicos no autorizados” o constituyen una “amenaza para la vida o la salud de la ciudadanía o para los bienes, amenazan con producir violaciones masivas del orden público o amenazan con crear obstáculos al funcionamiento de diversas instalaciones o con impedir su funcionamiento”, La ley tampoco aclara cómo se determinará la existencia de esas “amenazas”.

Por otro lado, la ley tipifica, como nuevo delito penal y administrativo, el “llamamiento en favor de medidas restrictivas en relación con la Federación Rusa, su ciudadanía o sus entidades jurídicas”, lo cual se interpreta como una criminalización de los llamamientos en favor de sanciones. En esos casos, un ciudadano, funcionario público o entidad jurídica ruso puede ser condenado a multas de entre 30.000 y 500.000 rublos (de 224 a 3.728 dólares), y si se descubre que aboga de nuevo por la imposición de sanciones a entidades rusas en un periodo inferior a un año, puede ser procesado penalmente, y condenado a multas de hasta 500.000 rublos (3.728 dólares) o a penas de hasta tres años de prisión.

Estas medidas constituyen una maniobra más del gobierno ruso para aplastar cualquier forma de disidencia que pueda quedar en el país, para lo cual no dudan en reforzar la censura, reprimir la libre circulación de la información y ocultar el verdadero coste humano y el grado real de destrucción que está provocando la invasión. Todos estos cambios legislativos violan la obligación de Rusia —en virtud del derecho internacional de los derechos humanos— de respetar, proteger y realizar los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, así como la propia Constitución rusa. Amnistía Internacional insta a las autoridades rusas a revocar de inmediato estas leyes y garantizar que, en Rusia, cualquier persona pueda expresar libremente sus opiniones sobre el conflicto, sin temor a represalias.

REPRESIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CONTRA LA GUERRA

En Rusia, ha habido protestas contra la guerra desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero. Según la ONG OVD-Info, el 14 de marzo habían sido detenidos ya, como mínimo 14.910 manifestantes pacíficos.¹ Sólo el 6 de marzo, fueron detenidas unas 5.000 personas en 69 ciudades rusas,² y el 13 de marzo, más de 900 personas en 39 ciudades.³

El 6 de marzo, la policía detuvo a Oleg Orlov, destacado defensor de los derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Memorial, minutos después de su llegada a la plaza Manezhnaya de Moscú, con un cartel que rezaba “Paz para Ucrania, libertad para Rusia”. Su compañera Svetlana Gannushkina, presidenta de la también conocida ONG Asistencia Cívica, fue detenida poco después de haber entrado en una estación de metro de Moscú. La policía comunicó que la habían identificado con ayuda de una tecnología de reconocimiento facial, y la habían llevado a una comisaría de policía, sin explicarle las razones de su detención. Tanto Gannushkina como Orlov fueron posteriormente acusados, en aplicación del artículo 20.2.5 del Código de Delitos Administrativos (“Violación de las normas sobre reuniones, concentraciones o marchas públicas u organización de piquetes por sus participantes”). En el momento de redactar estas líneas, ambos casos seguían pendientes de resolución ante los tribunales.

La mayoría de las personas detenidas durante protestas contra la guerra se enfrentan a cargos en aplicación de los artículos 20.2.5, 20.2.2 (“Organización de acto público sin notificación previa”), 20.2.8 (“Violación reiterada de las normas sobre participación en reuniones públicas”) y 19.3 (“Desobediencia a la orden legítima de un agente de policía”) del Código de Delitos Administrativos ruso. El Proyecto sobre Libertades de la Red Rusa ha informado ya, desde las protestas del 6 de

¹ <https://ovdinfo.org/>

² <https://ovdinfo.org/articles/2022/03/06/razbitye-golovy-i-elektroshokery-itogi-antivoennoy-akcii-6-marta>

³ <https://ovd.news/news/2022/03/13/spiski-zaderzhannyh-v-svyazi-s-akciyami-protiv-voiny-s-ukrainoy-13-marta-2022-goda>

marzo, de un mínimo de 144 causas abiertas en aplicación del nuevo artículo 20.3.3 “(Acciones públicas que tengan por objeto desacreditar el empleo de las fuerzas armadas”) en toda Rusia y en la Crimea ocupada.⁴

A fecha de 7 de marzo, al menos siete personas habían sido multadas con cuantías que iban desde los 30.000 hasta los 60.000 rublos (de 224 a 447 dólares) por haber instado a otras personas a sumarse a una acción contra la guerra exhibiendo en solitario eslóganes contra ésta, o por haber escrito “No a la guerra” en la nieve.⁵

Ioann Burdin, sacerdote de la localidad de Karabanovo, en la región de Kostroma, fue detenido el 7 de marzo por “desacreditación de las fuerzas armadas rusas”, en virtud del artículo 20.3.3 del Código de Delitos Administrativos. Los cargos en su contra se interpusieron poco después de que hubiera criticado la invasión de Ucrania en un sermón ante su congregación. También publicó, en la página web de la iglesia, un enlace a una petición de Change.org contra la guerra,⁶ y emitió una enérgica declaración pública contra la guerra, junto con un compañero suyo. El 10 de marzo, multaron con 35.000 rublos (261 dólares) a Ioann Burdin, quien va a recurrir la multa.⁷

Como ya ha ocurrido en numerosas reuniones públicas, desde varias ciudades se han recibido noticias sobre detenciones arbitrarias de transeúntes por la policía. Por ejemplo, junto con Oleg Orlov, la policía detuvo a una joven tan sólo por haberle aplaudido.

También se ha detenido a trabajadores o trabajadoras de los medios de comunicación que cubrían actos de protesta. Por ejemplo, durante las protestas del 6 de marzo, detuvieron, como mínimo a 13 periodistas en distintos puntos del país, incluidos Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk y Ufa. Asimismo, el 13 de marzo, detuvieron de manera arbitraria, al menos, a nueve periodistas más que cubrían actos de protesta. Amnistía Internacional ha analizado fotografías y vídeos publicados de esas detenciones, en los que se aprecia claramente que los periodistas llevaban un chaleco muy visible, con el indicativo de “prensa”. La policía los detuvo, a pesar de haber mostrado, tal como prescribe la ley, su acreditación como periodistas y el encargo laboral que tenían asignado, y de haber explicado que se habían desplazado al lugar en calidad de profesionales de la prensa. De esos periodistas, algunos quedaron posteriormente en libertad sin cargos, pero otros fueron acusados en aplicación del artículo 20.2.5 del Código de Delitos Administrativos, entre ellos Pavel Nikulin, director del medio online Moloko Plus, y el fotógrafo Artem Drachev, detenidos el 6 de marzo en la plaza Pushkinskaia de Moscú. En el momento de redactar estas líneas, sus casos seguían pendientes de resolución ante los tribunales.

También existen vídeos en los que se ve a la policía apartando a empujones a periodistas o diciéndoles que no interfirieran en la labor policial.

De igual forma, la policía ha detenido o atacado a niños y niñas que han participado en concentraciones públicas pacíficas y, según la ONG OVD-Info, ha detenido, al menos, a 113 menores de edad desde el 24 de febrero. El 6 de marzo, la policía de Arkhangelsk detuvo a una mujer y su hijo de corta edad —que llevaban globos amarillos y azules, colores representativos de la bandera de Ucrania—, presuntamente, por haberse negado a salir de la plaza central de la ciudad.⁸

En las manifestaciones pacíficas han sido, también, objetivo de la policía personas de edad avanzada. En Kaliningrado, la policía detuvo a una anciana, que intentó explicar a un mando policial por qué se había sumado a la protesta. En respuesta, el policía le espetó “¿has venido a defender a los fascistas?”, y ordenó a sus subordinados que la detuvieran.⁹

Las manifestaciones contra la invasión rusa de Ucrania han sido disueltas de forma sistemática, a menudo con uso de fuerza innecesaria y excesiva. La ONG OVD-Info ha informado de, al menos 34 casos que podrían ser constitutivos de tortura, ocurridos durante las manifestaciones del 6 de marzo. Los vídeos de los hechos que ha examinado Amnistía Internacional muestran a la policía golpeando brutalmente a manifestantes pacíficos, incluidas mujeres, disparándolas con pistolas paralizantes, propinándoles puñetazos y patadas, arrastrándolos y sometiéndolos a otros malos tratos. A consecuencia de ello, varios manifestantes afirman haber sufrido lesiones en la cabeza y en otras partes del cuerpo. En

⁴ Véase también Pavel Chikov, quien sitúa la cifra de causas en torno a las 60:

<https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/07/vozbuzhdeno-kak-minimum-60-del>

⁵ <https://meduza.io/feature/2022/03/07/dva-dnya-nazad-v-rossii-prinyali-zakon-o-feykah-pro-voynu-za-eto-vremya-zaderzhali-uzhe-60-chelovek-za-mitingi-nadpisi-net-voyne-na-snegu-i-antivoennye-propovedi>

⁶ <http://karabanovo.prihod.ru/index> El sacerdote tuvo que borrar la declaración y el enlace a la petición, pero mantuvo las declaraciones contra la guerra de otros sacerdotes. Pueden leer aquí el texto de la declaración de Karabanovo:

<https://zona.media/news/2022/03/06/priest>

⁷ <https://kostroma.today/news/kostromskoj-svyashhennik-budet-obzhalovat-reshenie-suda/>

⁸ https://t.me/horizontal_russia/8892

⁹ https://t.me/horizontal_russia/8930

algunos casos, la policía ha agredido también a manifestantes pacíficos que han intentado grabar algún acto, como la detención de otra persona, con sus teléfonos móviles.

Asimismo, se han recibido noticias sobre torturas y malos tratos de personas recluidas en comisarías de policía. En una perturbadora grabación de audio,¹⁰ efectuada por una mujer que se encontraba detenida en la comisaría de policía de Bateevo (Moscú), se oye cómo la humillan e insultan, la abofetean y la golpean, al parecer con una botella de plástico llena de agua, método habitual entre la policía del país para causar dolor sin dejar señales visibles en el cuerpo de la víctima.

Las noticias llegadas de varias ciudades en las que se ha detenido a manifestantes apuntan a todo un abanico de violaciones de derechos, entre ellas reclusión en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, toma ilegal de huellas y de fotografías para una base de datos policial y confiscación de teléfonos móviles. En algunas ciudades, como Moscú, Omsk y Ekaterimburgo, se ha informado también de abogados y abogadas que no han recibido autorización para ver a las personas detenidas. Dos profesionales del derecho de Ekaterimburgo (los Urales), especialistas en derechos humanos, confirmaron —en conversación con Amnistía Internacional— que no se permitía a los abogados y abogadas entrar en numerosas comisarías de policía y, que en ocasiones, éstos tuvieron que esperar, en la calle, un mínimo de cinco horas hasta recibir autorización para ver a sus clientes. Al mismo tiempo, según declaraciones a Amnistía Internacional de una de las personas detenidas en actos de protesta (que no pudo ver a su representante legal), la policía aseguraba a las personas detenidas que no había ningún abogado disponible.

Las autoridades recurrieron también a “detenciones preventivas” para impedir que se sumaran a protestas conocidos activistas y políticos de oposición, en cuyos domicilios y oficinas irrumpieron la víspera de las protestas del 6 de marzo. El 5 de marzo, se efectuaron registros domiciliarios masivos en las ciudades de San Petersburgo, Vladímir, Pskov, Tiumén y Chitá. En San Petersburgo, se efectuaron, al menos, 80 registros domiciliarios bajo pretexto de una investigación penal, abierta en aplicación del artículo 207.2 (“Difusión de información falsa a sabiendas sobre un acto terrorista”) por unas llamadas telefónicas recibidas, en las que se avisaba a las autoridades de varias bombas, presuntamente colocadas en edificios públicos. Si una persona acusada en virtud de ese artículo es hallada culpable, puede ser condenada a hasta cinco años de cárcel.

De entre las personas detenidas antes de las protestas, algunas quedaron después en libertad, sometidas a ciertas restricciones, mientras que otras, como Darya Heiniken (San Petersburgo) pasaron 48 horas recluidas, para impedir su participación en las protestas. Un elevado número de activistas afirmaron que les habían confiscado los teléfonos móviles y los ordenadores durante los registros, y que les preocupaba que la policía pudiera estudiar sus contactos, redes y filiaciones. Estos activistas consideraban que los registros eran un instrumento de intimidación, que se utilizaba, también, para impedir su participación en concentraciones contra la guerra.¹¹ El 13 de marzo, antes de la celebración de diversas protestas previstas, varios de ellos fueron detenidos de nuevo con distintos pretextos.¹²

REPRESIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS REDES SOCIALES

La creciente censura ha costado cara a los medios de comunicación independientes y las redes sociales de toda Rusia. Poco después del 24 de febrero, se bloqueó el acceso a más de una docena de páginas web rusas e internacionales, tras haber ordenado las autoridades referirse a la guerra como “operación especial de las fuerzas armadas rusas en Ucrania”, y utilizar sólo información sobre la invasión rusa de Ucrania “recibida exclusivamente por conductos oficiales rusos”.

Entre los medios de comunicación bloqueados figuraban el servicio de la BBC en ruso, Deutsche Welle, Radio Liberty y sus proyectos regionales, Meduza y Mediazona. Asimismo, fueron bloqueados medios de comunicación rusos regionales, como TV Station TV-2 (ciudad de Tomsk), Znak.com (los Urales), *Pskovskaya Gubernia* (ciudad de Pskov) y 7x7 (ciudad de Siktivkar). El 1 de marzo, quedó bloqueado el acceso online a la popular emisora de radio Echo Moskvyy, tras haber interrumpido su retransmisión, para clausurarla posteriormente. Otros medios de comunicación independientes, como TV Rain y Znak.com, anunciaron que tenían que suspender sus actividades a causa de la censura y las restricciones.¹³ Por su parte, medios como *Novaya Gazeta* eligieron continuar, pero tuvieron que borrar materiales sobre el conflicto armado de Ucrania ante el temor a posibles sanciones, mientras que The Bell decidió comunicar abiertamente que iba a dejar de informar sobre la situación.

¹⁰ <https://t.me/ovdinfo/13832> ; <https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/07/putin-na-nashei-storone-18>

¹¹ <https://ovd.news/express-news/2022/03/05/v-neskolkih-regionah-siloviki-prishli-s-obyskami-k-pravozashchitnikam> ; <https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/06/telefonnoe-delo>

¹² <https://ovd.news/express-news/2022/03/12/v-peterburge-zaderzhivayut-aktivistov-u-kotoryh-ranee-byli-obyski>

¹³ <https://www.kommersant.ru/doc/5240589>

Los peligros y dificultades a los que se enfrentan los periodistas y el personal de los medios de comunicación se han agravado de manera considerable después del 4 de marzo, fecha en que se aprobó una nueva ley que, en términos prácticos, imponía censura de guerra. El cierre de medios de comunicación independientes, unido a las nuevas leyes que prohíben la difusión de “noticias falsas” y el “descrédito” de las fuerzas armadas rusas, han provocado el éxodo masivo de Rusia de periodistas, tanto extranjeros como rusos. Según el medio online Agentstvo, a fecha de 7 de marzo, y desde el inicio de la invasión de Ucrania, habían tenido que salir de Rusia, al menos, 150 periodistas por temor a represalias.¹⁴

El 4 de marzo, las autoridades rusas bloquearon también Facebook y Twitter. En su comunicado oficial, Roskomnadzor afirmó que Facebook había sido bloqueado por “26 casos de discriminación contra medios de comunicación y fuentes de información rusos”. En concreto, Roskomnadzor se refirió a la decisión de Facebook de bloquear las cuentas de Zvezda, RIA Novosti, Sputnik, RT, Lenta.ru y Gazeta.ru, todos ellos medio de comunicación gubernamentales o afines al gobierno. Por su parte, según Roskomnadzor, Twitter había sido bloqueado por no haber borrado “más de 800 materiales” ni cumplir la legislación rusa, que obliga a las redes sociales extranjeras a abrir oficinas en Rusia. Además, Roskomnadzor señaló, como condiciones para el restablecimiento del acceso a Twitter, que éste “borrara por completo los materiales prohibidos y dejara de participar en la guerra informativa, difundiendo noticias falsas e incitando al extremismo”.¹⁵ El 14 de marzo, Roskomnadzor bloqueó también Instagram en Rusia.

El 5 de marzo, las autoridades declararon “indeseable” iStories Fonds entidad jurídica —registrada en Letonia— del medio de comunicación iStories (Vazhnye Istorii), que ya había sido calificado de “agente extranjero” en Rusia. También fue declarada “indeseable” la entidad estadounidense Journalism Development Network Inc, fundadora del proyecto de investigación contra la corrupción OCCRP. Anteriormente, ya habían sido declarados “agentes extranjeros” varios periodistas que cooperaban con OCCRP.¹⁶

Esta escalada de ataques contra la sociedad civil rusa y de represalias contra manifestantes pacíficos y voces disidentes debe cesar, así como la feroz represión ejercida contra los medios de comunicación independientes del país. Rusia debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y, en consecuencia, respetar, proteger y realizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, lo que implica, entre otras cosas, permitir la celebración sin obstáculos de protestas pacíficas contra la guerra, liberar a todos los manifestantes pacíficos recluidos y retirar los cargos en su contra, levantar todas las restricciones impuestas a los medios de comunicación independientes y derogar todas las leyes que restringen, en exceso y de manera arbitraria, los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

¹⁴ <https://t.me/wwwagentsmedia/682> ; <https://www.currenttime.tv/a/okolo-150-zhurnalistov-pokinuli-rossiyu/31739962.html>

¹⁵ <https://www.interfax.ru/russia/826411>

¹⁶ <https://zona.media/news/2022/03/05/minust>